

Ciencia, desarrollo y política. La universidad argentina en la trama de los años sesenta

José Zanca*

El laberinto argentino (1955-1969)

La alianza que derrocó al general Perón en septiembre de 1955 hizo confluír a un conjunto muy heterogéneo de enemigos del depuesto régimen. Los partidos políticos que, más allá de sus diferencias, compartían un abanico de principios liberales que el peronismo había venido a cuestionar, cooperaban con la jerarquía católica, quien había recelado de los partidos y del liberalismo, con quien había logrado en los años previos, apenas, un *modus vivendi*. Los católicos nacionalistas acompañados de demócrata cristianos, a quienes separaba más de una década de enfrentamientos dentro del campo religioso; militares industrialistas junto a empresarios que soñaban volver a una economía desregulada. Finalmente, el movimiento estudiantil universitario, uno de los pocos sectores que podía exhibir su inquebrantable conducta de oposición a Perón desde sus orígenes, cuando protagonizó las movilizaciones contra el gobierno de la Revolución del 4 de junio de 1943. El rápido desplazamiento del general Lonardi, a los pocos meses de su asunción, mostraron el fin de la política de conciliación con el depuesto régimen y la fragilidad de la alianza que lo había llevado al poder.

La inestabilidad política que se abría a fines de 1955 se profundizaría a lo largo de los posteriores diez años. Los frágiles acuerdos entre actores políticos, económicos y militares, así como

el peso ineludible de los trabajadores organizados en sindicatos, dibujaron un escenario en el que se sucedieron intentos de normalización institucional y fracasos más o menos violentos. Los protagonistas no actuaban en bloque, dado que cada institución estaba dividida frente a la pregunta —cada vez más acuciante— sobre el peronismo y sobre Perón, exiliado, pero omnipresente en la política argentina. La tentativa de reintegrar al justicialismo a través de acuerdos, como lo ensayó el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), o de la disolución del peronismo en fórmulas políticas más amplias, como la de José María Guido (1962-1963), o de la integración gradual al sistema político democrático como lo hizo Arturo Illia (1963-1966) fracasaron estrepitosamente. La sociedad argentina era testigo y protagonista de esta sucesión de alquimias, que llegaron al conflicto armado, como en 1962 y 1963 entre “azules y colorados”, cuando dos sectores de las fuerzas armadas se enfrentaron en las calles de Buenos Aires. Los diez años que separan a la Revolución Libertadora (1955-1958) de la Revolución Argentina (1966-1973) están signados por marchas y contramarchas, por comportamientos políticos erráticos, por acuerdos frágiles y actores que, operando en forma vicaria —tanto los representantes de Perón como los supuestos representantes del pueblo o de valores trascendentes, como Occidente o la Nación—, intentaron elaborar salidas posibles a los dilemas del laberinto argentino.

* Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación Histórica y doctor en Historia por la Universidad de San Andrés. Es investigador independiente del Conicet. Es miembro de la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad (REDHISEL). Ha publicado *Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad (1955-1966)* (2006), *Cristianos antifascistas. Conflictos en la cultura católica argentina (1936-1959)* (2013) y *Los humanistas universitarios. Historia y memoria* (2018). Ha coordinado numerosas obras colectivas, entre las que se destacan *Pasiones anticlericales. Un recorrido iberoamericano* (2014) y *Fronteras disputadas: religión, secularización y anticlericalismo en la Argentina (siglos XIX y XX)* (2016), ambas junto con Roberto Di Stefano, y *La reforma universitaria cuestionada* (2018), junto con Diego Mauro. Ha publicado diversos artículos sobre la historia de los intelectuales y la religión en publicaciones académicas de la Argentina y del exterior.

Al escenario de dramas locales, se superpuso e integró a partir de 1959 la Guerra Fría que llegaba a América Latina como efecto de la Revolución cubana. La toma de La Habana por parte de los guerrilleros del movimiento 26 de Julio y su posterior alineamiento en el bloque soviético generó un cambio en la política norteamericana hacia el continente, en el que se combinaba, en distintas proporciones, políticas de seguridad y proyectos de desarrollo. Más allá de las disposiciones de las altas esferas, la política cotidiana vivió un clima de histeria anticomunista, en el que se fue reforzando la figura del “enemigo interno”. Este sujeto, conspirador camuflado, aparecía como un agente de la disolución social y ariete de proyectos revolucionarios (Franco, 2012). Muchos grupos dentro del peronismo vieron la Revolución cubana y el clima revolucionario de los años sesenta como el momento ideal para profundizar el perfil disruptivo del movimiento creado por el general Perón, avanzando hacia su confluencia con el resto de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas del Tercer Mundo.

Lo singular de la situación argentina de los sesenta fue que el temor al avance del comunismo se combinaba con el deseo de una transformación rápida y enérgica de las estructuras económicas y sociales. El desarrollo se convirtió en el organizador de las agendas públicas y privadas, y en el que actores políticos carentes de legitimidad democrática podían reivindicar una legitimidad de gestión. Si no habían llegado al poder a través de elecciones libres y sin proscripciones, o habían accedido a través de un golpe de Estado, al menos podían aspirar a poner en marcha las ruedas del crecimiento económico. El desarrollo aparecía como la panacea del drama argentino. Desatar el nudo económico era la clave para desatar el nudo social y político. Y esta mirada prevaleció, durante años, entre militares, economistas y diversos actores de la esfera pública. La tecnología, la planificación, la integración y la explotación de las potencialidades naturales de Argentina aparecían entremezcladas con un inquebrantable optimismo. A pesar de que el escenario político mostraba un espectáculo deprimente, la prensa de masas, hegemonizada por magazi-

nes de actualidad política como *Primera Plana*, *Confirmado* y *Panorama*, ilustraban sus páginas con imágenes de obras y emprendimientos en los rincones más alejados del país en donde se dejaba atrás la sociedad tradicional, y se abrían las puertas a la modernidad (Cosse, 2014; Manzano, 2014). En ese sueño de curación a través del desarrollo, la universidad tenía asignado un papel primordial.

Las relaciones entre el peronismo y los universitarios habían sido, durante toda una década, de una marcada hostilidad. Las organizaciones estudiantiles reformistas formaron parte del entramado antifascista de los años treinta y cuarenta y, al igual que ese colectivo de políticos e intelectuales, no dudaron en identificar a Perón como una reedición latinoamericana de los fascismos europeos. Por su parte, el líder justicialista fracasó en sus intentos de captar el beneplácito de los estudiantes y profesores, y aplicó una política universitaria claramente antirreformista en la que, más allá de limitar el poder político de los estudiantes, ubicaba a las casas de altos estudios en un proyecto político estratégico más amplio, en el que el baluarte reformista de la autonomía quedaba desdibujado. Los primeros años del gobierno peronista produjeron un éxodo de docentes que se refugiaron en instituciones privadas, en el dictado de cursos particulares o directamente optaron por el exilio en el exterior. Una “universidad en las sombras” funcionó en esos años en torno a publicaciones y espacios informales, como fueron las revistas *Imago Mundi* del historiador José Luis Romero o *Ver y Estimar*, del crítico de arte Jaime Romero Brest (Pronko, 2000; Almaraz, 2001; Sarlo, 2007; Buchbinder, 2010; Fiorucci, 2011; Acha, 2018).

En 1955 estudiantes y docentes recordaban al peronista como un período oprobioso, en el que el gobierno no había podido doblegar a los claustros, aunque sí a muchos de sus miembros. Era necesario entonces —y en armonía con el espíritu de la Revolución Libertadora— refundar la universidad argentina volviendo a los valores de 1918, poniendo en el centro de su programa de acción el cogobierno, la autonomía y los concursos públicos (Rotunno y Díaz de Guisjarro, 2003; Buchbinder y Califa, 2010; Pis Diez,

2014). También por las paradojas de la alianza que derrocó a Perón, le tocaría defender esos principios a un intelectual católico como Atilio Dell’Oro Maini, perteneciente a una fracción que se había opuesto en los años veinte y treinta al reformismo en sus distintas vertientes. La singularidad del proyecto de educación superior del Ministerio estuvo dada por la inclusión del artículo 28 (Decreto 6403/55), en el que se habilitaba la creación de universidades privadas, con la capacidad de emitir títulos habilitantes. Tal medida causó un fuerte impacto en la comunidad académica —y en la sociedad toda—, en la que más allá de las diferencias políticas, la laicidad de la educación y su carácter público eran un bastión de significativas dimensiones simbólicas. A partir de enero de 1956 se inició el famoso conflicto de la “laica y de la libre”, en el que se enfrentaron quienes estaban a favor y en contra del Decreto-Ley. El interventor de la Universidad de Buenos Aires, José Luis Romero, se opuso a la nueva norma, impulsada por el ministro de Educación. Se produjeron tomas y refriegas en Capital Federal y en otras ciudades universitarias del país. Los estudiantes secundarios se sumaron a la protesta. El presidente Aramburu prefirió diferir el conflicto que dividía el frente antiperonista, y aceptó las renunciaciones de Dell’Oro y de Romero, postergando la reglamentación definitiva del famoso “artículo 28” para la futura gestión del gobierno que surgiera de las urnas (Zanca, 2006).

El conflicto “laica o libre” resurgió en 1958, cuando el candidato y luego presidente, Arturo Frondizi, tomó la decisión de resolver la cuestión del sistema universitario. En contra de la tradición laicista del liberalismo argentino, que había impedido que surgieran universidades privadas en el pasado —por ejemplo, la primera Universidad Católica, fallido proyecto entre 1910 y 1920—, el nuevo presidente apoyó la habilitación de casas de altos estudios no estatales. El debate parlamentario de ese año, en el que se discutieron y negociaron los pormenores de la reglamentación, estuvo acompañado por una impactante movilización encabezada por estudiantes, pero seguida por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos y grupos eclesiásticos, que se desplazaron a

favor de uno u otro bando. Fue una de las más importantes confrontaciones en torno a la cuestión de la laicidad en el siglo XX. El resultado fue el triunfo de la opción “libre” y la reformulación del sistema universitario argentino en dos segmentos, uno público y otro privado.

Las universidades públicas se reorganizaron a partir de 1957, recuperando la autonomía plena y poniendo a funcionar tanto sus instituciones de gobierno como la renovación de sus planteltes docentes. Luego del derrocamiento del peronismo, los profesores que habían tenido algún grado de compromiso con el “régimen depuesto” fueron desplazados. En los llamados a concursos para cubrir las vacantes se hizo explícito que los candidatos no tuvieran antecedentes en apoyo a gobiernos totalitarios. Durante el funcionamiento del consejo superior y los consejos directivos de las facultades, la cuestión de los “antecedentes” cívicos fue un tema de polémica recurrente. Lo cierto es que el campo académico, lejos de fundarse en la neutralidad ideológica, se asentaba en un principio de exclusión del peronismo que, de esta manera, pagaba caro sus políticas antirreformistas (Neiburg, 1998).

Durante los diez años que mediaron entre 1955 y 1966 las universidades lograron sortear el clima de inestabilidad que caracterizó la política argentina. A lo largo de la década se produjeron distintos conflictos que pusieron a las casas de altos estudios en el centro de la escena pública. Sin embargo, sus organismos lograron tramitarlos sin que se produjera una ruptura institucional, evitando los llamados a la intervención de las voces más conservadoras, dentro y fuera de las universidades. En algún punto, la imagen de la “isla democrática” no era tan inexacta. La continuidad universitaria en el medio de la tormenta política argentina puede explicarse por el papel que se esperaba de los expertos en el proceso de desarrollo. La planificación en todos los niveles era el mecanismo que resolvería las tensiones sociales a través de la innovación tecnológica y la ingeniería social. En ese clima de ilimitado optimismo, poner a la universidad al servicio de los “grandes problemas” del país fue una misión que se autoasignaron las elites que controlaban su vida académica. Luego de déca-

das de producir profesionales liberales, la universidad se volcó a fines de los años cincuenta a la promoción de la investigación, a través de la creación de institutos, la asignación de dedicaciones exclusivas a sus docentes y la articulación con nuevas instituciones específicas, como el Conicet, establecido en 1958.

Sin embargo, y a pesar de la imagen un tanto idealizada que se ha construido en torno a esta “época de oro”, el proceso de modernización universitaria —paso previo e indispensable para la modernización del país— generó fuertes tensiones y mostró rápidamente sus límites. No todos los grupos estaban de acuerdo con las consecuencias que traería aparejado el anhelado sueño de incorporar a la Argentina al club de los países desarrollados. Los conflictos entre los distintos claustros por la aceptación o rechazo a programas de financiamiento provenientes del exterior, o los cuestionamientos que formulaban los docentes más conservadores a las nuevas carreras tecnológicas o a cualquier reagrupamiento de funciones —en pos de aumentar la eficiencia— que recortara el poder de las facultades en el concierto de las estructuras universitarias, generaba problemas, protestas, y necesarios compromisos en una estructura democrática que se manejaba con acuerdos y negociaciones constantes. Los proyectos de modernización tuvieron alcances limitados, se localizaron en ciertas casas de estudios, y las demandas presupuestarias y las tensiones políticas internas fueron un freno para su avance (Buchbinder, 2010).

La universidad de los sesenta se distinguió por la singularidad de los grupos que participaban de su debate interno. Si en el plano de la política nacional el clivaje peronismo-antiperonismo parecía cruzar a todas las instituciones, entre los estudiantes la polémica adquiría un color mucho más europeo: católicos *versus* izquierdistas. Por un lado, el conflicto “laica o libre” consolidó al reformismo, que tuvo un motivo para superar circunstancialmente sus diferencias cada vez más claras entre los grupos más radicalizados y los liberales antiperonistas. Por el otro, segmentos “independientes” se fueron incorporando a distintas versiones de un nove-

doso catolicismo —en mayor o menor medida— progresista. Humanistas, integralistas y ateneístas fueron poblando los consejos directivos y superiores y, en menor medida, los centros de estudiantes, en los que compartían espacios con los reformistas (Zanca, 2018).

Esto último fue posible, entre otros motivos, por las transformaciones que se operaron en el campo católico desde fines de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, tanto por la circulación de ideas entre el viejo y el nuevo continente como por motivos locales —la revalorización de las libertades públicas que los católicos experimentaron bajo el peronismo—, las ideas del humanismo cristiano de Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, el padre Louis-Joseph Lebret interpelaron con fuerza a jóvenes estudiantes que, sin ser particularmente devotos, encontraban en la filosofía y las ideas de este conjunto de pensadores una vía intermedia entre el liberalismo y el comunismo, sin necesidad de adherir al peronismo. El ideario de este humanismo cristiano cuestionaba el individualismo del capitalismo liberal, aunque reivindicaba —como una innovación dentro del pensamiento católico— los derechos de la persona frente al Estado, las libertades públicas y la democracia. Rompía de esa manera con la línea del nacionalismo católico, hegemónica en el campo cultural católico en el período de entreguerras (Zanca, 2006).

Estos debates que laceraban al catolicismo de los años cincuenta confluyeron en el Concilio Vaticano II (1962-1965). El magno evento fue un verdadero terremoto en las filas de la Iglesia, tanto para los sacerdotes como para los laicos, por la apertura al mundo que se propiciaba desde los documentos conciliares y por el clima —que excedió, sin duda, los aspectos legales de la convocatoria— que abrió la posibilidad de múltiples y variadas apropiaciones. Si en Europa la problemática del diálogo con otros grupos religiosos —en particular cristianos ortodoxos y protestantes— aparecía como uno de los primeros puntos de la agenda del catolicismo, en América Latina la lectura giró en torno al problema de la pobreza y las posibilidades efectivas que ofrecía el desarrollo para superar

sus grandes e injustas brechas sociales, étnicas y culturales. No era nueva la atención del catolicismo a la cuestión social, pero en la posguerra y con el avance geográfico del comunismo y la Guerra Fría, se volvió una cuestión urgente. El desarrollo ofrecía al catolicismo una vía de salida para el problema de la pobreza. Pero desde mediados de los sesenta, el fracaso de la convivencia entre democracia y desarrollismo implicó que muchos laicos católicos tendieran puentes inesperados hasta el momento. Se abrió el diálogo católico-marxista, y luego de 1966 se produciría una confluencia entre católicos y peronistas, en particular con la aparición de líderes socialcristianos de gravitación nacional como el dirigente gráfico Raimundo Ongaro o de larga militancia peronistas como Amado Olmos, del gremio de la Sanidad.

En síntesis, a la salida del primer peronismo, el acuerdo en torno a la necesidad del desarrollo inauguró un clima de coincidencias entre distintos actores del mundo universitario. Los expertos que podían formarse en las carreras más avanzadas eran una pieza fundamental para la transformación social, un cambio aceptable que no pusiera en riesgo los límites del sistema. Católicos y reformistas parecían coincidir en este y en muchos otros puntos, a pesar de sus diferencias. A mediados de la década de 1960, la democracia comenzó a ser percibida por distintos actores como un impedimento para concretar los sueños de desarrollo. Y la universidad no salió indemne de esa nueva coyuntura.

De la unidad a la ruptura [1955-1962]

Las relaciones entre las agrupaciones reformistas y el peronismo fueron hostiles desde el comienzo. Durante la campaña electoral de 1946, la FUBA ingresó en la Unión Democrática con el fin de derrotar al candidato del “nazi-fascismo”. Los estudiantes universitarios encarnaron a uno de los sectores más refractarios a la prédica peronista. Durante su segundo mandato, el peronismo incrementó la presión ideológica sobre la universidad, incorporándose a los planes de estudio el dictado de la doctrina justicialista. La coacción ejercida llevó a cada vez más estu-

diantes de la oposición pasiva al activismo. Se abrieron nuevas vías ideológicas para el ingreso de los jóvenes en la arena político-universitaria. Tal es el caso de la creación, en 1950, de la Liga Humanista en la Universidad de Buenos Aires. Sus antecedentes pueden rastrearse en las divisiones que generaron en la cultura católica tanto la Segunda Guerra Mundial como la llegada del peronismo al poder. La aparición de una corriente humanista cristiana o demócrata cristiana dentro del catolicismo había crecido desde la extensa visita (y sus conflictivas derivaciones) que realizó Jacques Maritain a la Argentina en 1936 (Zanca, 2013). Las fuentes ideológicas del humanismo eran eclécticas y plurales. Incluían desde la antropología de Max Scheler y Martin Buber, hasta la filosofía de Berdiaev, Kierkegaard y Jaspers, pasando por el personalismo de Maritain y Mounier y el vitalismo de Ortega y Julián Marías. Los primeros núcleos del humanismo porteño surgieron en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde el encuentro entre Ludovico Ivanissevich Machado y los hermanos Di Tella (Guido y Torcuato) dieron origen a la lista Humanista Renovadora del CEI (Centro de Estudiantes de Ingeniería). En el otoño de 1953, se reunieron junto a Enrique Oteiza y Guillermo Di Paola para redactar *Humanismo y Universidad*, el documento que sentaría las bases ideológicas del movimiento. Los humanistas ingresaron a la FUBA diferenciándose de otros grupos católicos, que creían que la Federación era “intrínsecamente perversa”, y luego de que esta, a propuesta de los delegados humanistas de la Facultad de Agronomía, modificara su estatuto y eliminara la exigencia de “fe reformista” a sus miembros. Esta actitud de apertura del humanismo lo distanció de la jerarquía católica, que veía con malos ojos el “modernismo” de la Liga (Orbe, 2004; Califa, 2014).

La política universitaria del peronismo, más allá de su perfil claramente antirreformista, implicó una apertura de los estudios de nivel superior a un número creciente de jóvenes. La matrícula casi se triplicó en esos años, pasando de aproximadamente 50.000 estudiantes en 1945 a 140.000 en 1955. Tal crecimiento fue el producto de la política de becas, la eliminación de aranceles y la supresión de los exámenes de

ingreso que propició el justicialismo. A pesar de esta apertura, fracasaron los intentos del peronismo por formar agrupaciones estudiantiles propias. En 1950 se creó la Confederación General Universitaria (CGU) que intentaba agremiar, en forma análoga a la CGT, a los estudiantes universitarios. Si bien obtuvo diversos privilegios por su carácter oficial —coincidente con las restricciones que se les imponía a los centros de estudiantes donde participaban reformistas y humanistas—, no logró que los alumnos se sumaran a sus filas (Acha, 2018).

La existencia de un adversario común —el peronismo— aceitó las relaciones y el clima de unidad entre reformistas no comunistas y humanistas. Eso permitió la concurrencia y acción conjunta en muchas facultades, en donde el enemigo era el peronismo y el nacionalismo católico. Las relaciones entre el movimiento estudiantil y el gobierno peronista se terminaron de tensar el 5 de octubre de 1954, durante la tradicional ceremonia anual de entrega de medallas a los alumnos organizada por el Centro de Estudiantes de Ingeniería. El homenaje terminó en una batahola protagonizada por policías de civil y “elementos extraños”, según relataron los estudiantes. Decenas de participantes fueron detenidos y enviados a la cárcel de Villa Devoto, en donde permanecerían durante el verano. Desde noviembre de 1954 los católicos tenían, a su vez, un nuevo motivo para oponerse al gobierno: la diatriba de Perón contra la jerarquía eclesiástica y la subsiguiente campaña anticlerical que se desarrolló desde distintas posiciones gubernamentales, pero que también comprometió a la militancia peronista a lo largo del país (Di Stefano, 2010). Reformistas y humanistas apoyaron activamente —al igual que el resto del arco político no peronista— el golpe de Estado de 1955. En Buenos Aires tomaron la universidad para entregarla a las nuevas autoridades.

A fines de 1955 se cancelaría este clima de unidad en el que convivían socialistas, radicales y católicos, con el famoso “artículo 28” del Decreto-Ley 6403/55. Si bien el enfrentamiento redujo las posiciones a una disputa binaria (laicos *versus* libres), el duelo discursivo fue mucho más complejo. Los humanistas, a pesar de sus malas

relaciones con la jerarquía, apoyaron la opción “libre” por motivos doctrinarios. Sus argumentos iban en línea con los principios en los que habían fundado el movimiento: un antiestatalismo centrado en la soberanía del individuo para elegir entre diversas orientaciones espirituales a la hora de seguir sus estudios superiores. Los humanistas terminaron en esos días sus buenas relaciones con el reformismo, que también utilizó el conflicto para galvanizar su frente interno, dividido por la lucha entre comunistas, radicales y socialistas (Micheletti, 2018).

A partir de 1957 se hicieron cada vez más claras las divisiones en el reformismo. La situación política nacional y el declive de la Revolución Libertadora llevaron a muchos sectores a criticar duramente la posición de sus dirigentes durante la “desperonización”, y la brecha que se había abierto con la clase obrera. Por un lado, los grupos más radicalizados incorporaron un discurso antiimperialista y combatieron la reinstalación del examen de ingreso en muchas facultades —que había sido eliminado por el peronismo—, al que consideraban una medida restrictiva. La izquierda aparecía como el sector que dinamizaba las protestas, en una actitud mucho menos contemplativa que los sectores “gorilas”, adheridos aun a la política antiperonista del gobierno cívico-militar. Por otro lado, los sectores más radicalizados eran quienes propugnaban una representación más igualitaria en el gobierno tripartito de la universidad. La cuestión de si las agrupaciones estudiantiles debían involucrarse o no en la política partidaria nacional —e internacional— también dividió a los grupos reformistas. A pesar de estos primeros síntomas de fraccionamiento, los reformistas fueron hegemónicos en las elecciones en los consejos directivos y también para la Asamblea Universitaria que terminó por elegir al nuevo rector de la UBA, Risieri Frondizi (Califa, 2014).

La normalización universitaria incluyó los concursos docentes convocados en 1956. Sus premisas se orientaban claramente hacia una renovación del perfil académico de los postulantes. Se valoraba positivamente la publicación en revistas extranjeras y la capacidad de formar discípulos. Se crearon, a su vez, nuevas carreras

en las facultades de Ciencias Económicas y Filosofía y Letras de la UBA, y se continuarían creando nuevas orientaciones a lo largo de la década, con especial énfasis en las ciencias aplicadas y en las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, el rediseño institucional de muchas facultades incluía la departamentalización y la creación de organismos dedicados a analizar la pedagogía universitaria. En octubre de 1958 se aprobó el nuevo estatuto de la UBA, en donde la investigación científica ocupaba un papel destacado —al igual que las tareas de extensión universitaria—, y se aseguraba un régimen de dedicaciones exclusivas y semiexclusivas.

La Revolución cubana de 1959 cambió el eje de la política en las universidades. Desplazó el foco de atención de la conducción reformista, de la realidad gremial cotidiana a la coyuntura política nacional e internacional (Toer, 1988). El humanismo buscó capitalizar electoralmente el clima de polarización que producían las repercusiones de la situación cubana en Buenos Aires, presentándose como la opción más clara para evitar que la política partidaria ingresara a la universidad. Logró éxitos en las facultades de Medicina, Ingeniería, Ciencias Económicas, Arquitectura y Agronomía. El triunfo del humanismo en las elecciones de 1962 le permitió imponer al nuevo rector de la UBA, Julio Olivera, desplazando al reformismo. La juventud de Olivera lo ubicaba como una figura representativa del espíritu renovador y apolítico que el humanismo impulsaba.

En síntesis, si bien el conflicto “laica o libre” estuvo marcado por escenas de confrontaciones callejeras violentas y discursos enardecidos en torno a cada una de las posiciones, la universidad retomó su unidad luego del enfrentamiento. La Revolución cubana planteó un nuevo desafío, dada la adhesión que despertó entre los estudiantes reformistas. Parecía abrirse una nueva era para América Latina, que exploraba vías alternativas para el desarrollo a través del cambio radical de su sistema político y económico. Sin embargo, las elecciones universitarias de 1962 confirmaron que la mayor parte de la comunidad universitaria prefería seguir una opción más moderada, como la del humanismo, que ofrecía garantías dentro de un desarrollismo capitalista.

Nuevos actores, nuevos desafíos [1962-1966]

El conflictivo marco de la política argentina luego del golpe de Estado que derrocó a Arturo Frondizi en 1962 contrastaba con la continuidad que tuvo el funcionamiento democrático de la universidad durante todo el período. Los consejos superiores, más allá de las marcadas diferencias que existían en su seno, funcionaron durante más de ocho años en forma ininterrumpida. Esto se dio a pesar de que muchos de sus miembros estaban en desacuerdo con el formato que había adoptado el régimen universitario en 1955. Las universidades tuvieron la capacidad de resistir los embates en favor de una intervención —o de una semiintervención— que distintas voces reclamaban en forma asidua desde la prensa. La heterogeneidad de los consejos obligaba a construir acuerdos, ceder posiciones y generar propuestas superadoras. En esos debates no quedaba rezagada la disputa de poder y el modelo de universidad que se pretendía. El desarrollismo que impregnaba la década hacía de la planificación uno de sus pilares (Suasnábar, 2004). Ese espíritu neopositivista chocaba con la tradicional forma de funcionamiento de muchas universidades y su carácter profesionalista. La planificación a largo plazo, el principal aporte que los modernizadores soñaban con llegar a una Argentina urgida de desarrollo, debía concretarse a través de ciertas estructuras que replicaran las que el propio Estado y las organizaciones internacionales estaban creando: entes de planificación estratégica que superarían las divisiones “caducas” de la sociedad —y la universidad— tradicional. Los grupos conservadores veían con malos ojos la creación de estos organismos —como los departamentos independientes de cada facultad—, dado que restarían poder a cada unidad académica en favor de los consejos superiores. En particular, les daría más poder a los expertos, que justamente provenían de disciplinas que empujaban estos cambios. Por otro lado, los grupos más radicalizados cuestionaban la supuesta “neutralidad” de los expertos, su capacidad de proveer de proyectos que garantizaran una distribución igualitaria del bienestar, si en primer lugar no se analizaban las estructuras injustas que caracterizaban al capitalismo.

Hacia 1965 los conflictos en la universidad se multiplicaron. Fue un año de movilizaciones para reclamar más presupuesto al Estado nacional. Pero al mismo tiempo se comenzó a resquebrajar el acuerdo que mantenía a flote el proyecto de una universidad que se modernizaba en el marco del cogobierno y la autonomía. Ese año se produjeron incidentes en la Facultad de Ciencias Económicas durante una charla a la que había sido invitado el destacado economista norteamericano Walt Rostow. El rector Olivera tomó la decisión de renunciar, y la Asamblea Universitaria nombró a Hilario Fernández Long (también vinculado al humanismo) como su reemplazante. Las divergencias en el seno del humanismo se incrementaron. Por un lado, algunos sectores desdibujaron las fronteras que los separaban de la izquierda marxista y de la naciente nueva izquierda. Las apropiaciones locales de la obra de Teilhard de Chardin y de buena parte del pensamiento católico del posconcilio servían para vaciar en esas voces la insatisfacción creciente respecto del modelo sociopolítico desarrollista y sus derivaciones universitarias. Por otro lado, un grupo también humanista, alarmado por la radicalización política nacional y universitaria, comenzó a adherir al reclamo de una intervención militar preventiva.

En otras regiones del país se había desarrollado un movimiento socialcristiano que fue ganando importancia hacia mediados de los años sesenta. El integralismo en Córdoba y el ateneísmo en Santa Fe, Corrientes y Chaco representaban una línea que se había transformado al calor de las innovaciones del mundo católico de esa década (Bonavena, 2005). En sus orígenes, en los años cincuenta, estos grupos tenían en común su rechazo al reformismo. Si bien participaban en la vida política interna de las facultades, se negaban a hacerlo dentro de los centros de estudiantes reformistas. Se diferenciaban también por haber nacido como organizaciones estrechamente apegadas a la Iglesia católica, y en muchos casos contaban con asesores o fluidos vínculos con sacerdotes (Millán, Bonavena y Califa, 2007). Los pensionados católicos, surgidos con el proceso de masificación universitaria que incentivó el peronismo, fueron ámbitos de sociabilidad de estas agrupaciones, en los que

religión, política y problemas universitarios se superponían (Buchbinder, 2010). Esto marcaba una diferencia con la Liga Humanista de Buenos Aires y sus asociadas del interior, que se mantenían alejadas de todo compromiso o vinculación con las autoridades eclesásticas.

Las universidades privadas se sumaron al escenario de la educación superior argentina luego de 1958. En términos cuantitativos, su impacto fue menor. Recién en la década de 1980 su participación en el total de estudiantes universitarios resultó significativa. Sin embargo, y luego del enfrentamiento de la “laica o libre”, en muchas estuvo presente el conflicto y el “espíritu de rebeldía” de la década. Si lo que se esperaba era que fueran espacios incontaminados de la acción política —como lo imaginaba el rector de la Universidad Católica de Buenos Aires, Octavio Derisi—, los acontecimientos posteriores lo desmentirían, dado que la conflictividad socioacadémica de los sesenta también las interperaría. Así, por ejemplo, en 1966 se desató una crisis en la UCA de Buenos Aires, cuando la mayor parte del Departamento de Sociología —dirigido por el intelectual católico José Enrique Miguens— renunció luego de enfrentarse con el rector, quien les reprochó públicamente el haberse solidarizado con los docentes y alumnos de las universidades públicas intervenidas ese año. Conflictos similares se produjeron en otras universidades confesionales del resto del país. Dentro del mismo campo católico comenzó a replantearse cuál era el objetivo de estos institutos. El pensamiento latinoamericano, gradualmente más orientado por una teología de corte liberacionista, se mostró cada vez más crítico de las universidades en las que estudiaban los hijos de las elites económicas. El documento de Buga (1967), previo al de Medellín (1968), cuestionaba el papel que habían desempeñado hasta ese momento, su calidad, e incluso llamaba a democratizar su estructura interna (Rodríguez, 2018). Este nivel de confrontación tuvo expresiones mucho más violentas en la década de 1970, en casos como el de la Universidad Stella Maris de Mar del Plata, la Universidad del Salvador o la Universidad Católica de Santa Fe (Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, 1978).

Mucho antes del golpe de Estado de 1966, distintos sectores sociales propiciaron una mirada censora sobre la vida interna de las universidades, alentando una intervención. A medida que nos acercamos al golpe, los cuestionamientos a la “excesiva politización” de las casas de altos estudios confluirán en un mismo diagnóstico: el problema era el cogobierno y la masificación. El temor a la infiltración marxista, la presencia de agitadores, eran tópicos recurrentes en la prensa periódica y en las reuniones del Consejo Superior de la UBA. Las publicaciones más influyentes de los años sesenta ponían a la universidad en el centro de la escena. En el fondo, al igual que la democracia, el cogobierno universitario obligaba a los encargados de la ejecución política a ciertas concesiones que podían atentar contra las soluciones prácticas inmediatas. Democracia y eficiencia parecían distanciarse. Por el contrario, el rector Fernández Long sostenía que el crecimiento y la calidad que había alcanzado la universidad pública era producto del gobierno tripartito en una universidad verdaderamente democrática (Zanca, 2018).

El 28 de junio de 1966, el gobierno de Arturo Umberto Illia fue derrocado por un nuevo golpe de Estado, pero de características bien distintas a los anteriores. Las fuerzas armadas, a través Juan Carlos Onganía, se proponían una reestructuración de la sociedad, con un espíritu de cruzada en el que confluía el moralismo antimodernista, una alta cuota de posibilismo desarrollista y un organicismo social que buscaba restablecer el orden quebrado en las décadas previas. Coherente con este clima de ideas, el 29 de julio de 1966 el nuevo presidente decretó la intervención de las universidades, permitiendo que las autoridades elegidas permanezcan en sus cargos, pero como funcionarios del Ejecutivo y no ya como representantes de las asambleas de los claustros. La mayoría de los rectores rechazó la intervención, con algunas excepciones. En Buenos Aires, se sumó la toma de facultades, la represión de la Noche de los Bastones Largos y una masiva renuncia de profesores y equipos de investigación. Esta última medida de protesta fue rechazada en otras universidades, en donde la renuncia era percibida más como un acto aristocrático que como una

decisión efectiva. Muchos equipos se mantuvieron y continuaron sus tareas, aunque en una creciente conflictividad con las autoridades de la intervención (Suasnábar, 2004).

Lo que efectivamente marcó el año 1966 fue el fin de la “isla democrática”. El proyecto de universidad de 1955, que crecía cuantitativa y cualitativamente, profundizando su masividad y su inserción como centro de la actividad intelectual y científica del país, no podía convivir con su carácter democrático ni con la inestabilidad y finalmente la caída del sistema político inaugurado tras el peronismo. Lo paradójico fue que actores muy diversos dentro de la vida universitaria coincidieron en identificar al onganiato como el principio de la radicalización del estudiantado, al cerrarse los canales democráticos para su expresión. Los grupos que en forma creciente confluían con el peronismo creían que la “isla democrática” había sido un sueño, parte de la alienación de los sectores medios que creían poder vivir una pseudoinstitucionalidad, mientras el principal partido político y su líder estaban proscriptos. Los grupos reformistas y humanistas sostuvieron un diagnóstico muy sombrío respecto de la intervención, el final de una era en la que, en el marco de los principios de la Reforma, distintas familias pudieron convivir en un ambiente de libertad y continuidad académica.

Golpe y sobrevivencia de la universidad en el onganiato [1966-1970]

El gobierno de Juan Carlos Onganía demoró un año en dotar a las universidades de un nuevo ordenamiento legal. El 25 de abril de 1967 emitió el Decreto-Ley 17245 que establecía los parámetros que debían seguir las casas de altos estudios en el marco de la Revolución Argentina. La ley recogía muchas de las propuestas elaboradas por distintos organismos en los años previos, en los que se enjuiciaba el alto grado de ineficiencia en el gasto y la baja titulación con relación a los inscriptos. Las propuestas habían apuntado entonces —y en esa línea se orientaba la ley de Onganía— a ponerle un freno a la masificación iniciada con el peronismo. Por otro lado, y como parte de una línea anti-

rreformista, se suprimía la participación de los estudiantes en el gobierno universitario y se sometía la autonomía a los planes del Estado nacional. La Ley Orgánica señalaba que su fin era formar universitarios capaces “de actuar con responsabilidad y patriotismo al servicio de la Nación”. Si bien se reconocía la autarquía financiera y la autonomía académica, el Poder Ejecutivo se guardaba recursos para intervenir en caso de que fuera necesario. Se prohibía cualquier actividad política, se instalaba el examen de ingreso y se promovía la estructura departamental y la agrupación de materias afines en unidades pedagógicas (Luca y Prieto, 2013; Mendonça, 2018).

Luego de la intervención, los estudiantes protagonizaron un ciclo de protestas, que agitó los primeros meses del gobierno militar. A mediados de agosto de 1966 comenzó el conflicto en Córdoba. Estudiantes integralistas ocuparon la parroquia Cristo Obrero e iniciaron una huelga de hambre. La Federación Universitaria de Córdoba declaró un paro estudiantil. En una manifestación, el 7 de septiembre, fue herido el estudiante Santiago Pampillón. Fallecería cinco días después y se convertiría en un símbolo de la resistencia a la dictadura, y el aniversario de su muerte sería un periódico motivo de movilizaciones y protestas estudiantiles. En esos días, refriegas similares se produjeron en Corrientes y Santa Fe (Millán, 2007, 2013; Vega, 2015)

La política económica del gobierno de la Revolución Argentina produjo como efecto colateral una traslación del escenario de la protesta social, en la que el interior del país ganaría un evidente protagonismo. Luego de un lapso de reflujos del movimiento estudiantil en 1967, desde fines de 1968 la protesta retomó su dinámica, en contra de las medidas de ajuste del gobierno militar. Córdoba se convirtió en el centro de la protesta, en donde confluyeron estudiantes integralistas y reformistas —unidos en la protesta callejera— con la emergencia de un movimiento obrero liderado por una conducción combativa, articulada en torno a la CGT de los Argentinos (CGTA). De este período debemos señalar, a su vez, el proceso de peronización de un segmento del estudiantado (Dip, 2017). Los sectores católi-

cos fueron los más permeables a esta confluencia. En esa línea se ubicaron algunos grupos del humanismo, el integralismo y el ateneísmo santafecino (Diburzi, 2007, 2014). Este socialcristianismo le daba una singular impronta a la protesta estudiantil. Se multiplicaron las “huelgas de hambre”, una táctica propia de la metodología de la “no violencia”. Estas reflejaban la influencia orientalista en la cultura juvenil de los años sesenta, encarnada en figuras como Lanza del Vasto (Zanca, 2014). Se repitieron las “misas” como espacios de protesta, en donde las palabras de inflamados y cercanos sacerdotes formaron un cuenco en el que volcar e interpretar la experiencia represiva. En muchos casos estas actividades coincidían con la ocupación de los edificios de la Iglesia, a la que se le reclamaba un compromiso con el pueblo y ser consecuentes con las premisas del Concilio. En todo caso, se trataba de una cultura de la movilización bastante alejada de la anticlerical tradición reformista.

La conflictividad fue *in crescendo* en 1969. En mayo estallaron protestas en la Universidad del Nordeste por la privatización del comedor estudiantil. Como en otras provincias, se formó una coordinadora en la que se unieron reformistas y católicos. Los estudiantes lograron el apoyo de la Iglesia y otros sectores. En ese contexto de refriegas y enfrentamientos callejeros, el 15 de mayo las fuerzas de seguridad asesinaron al alumno Juan José Cabral. Ante el nivel de conflicto, el gobierno de Onganía decidió cerrar las universidades en forma preventiva. La noticia de la nueva muerte de un joven a manos de la policía disparó la solidaridad en todo el país (Millán, 2007). El efecto fue contundente en Córdoba, en donde el clima sociopolítico estaba a punto de estallar. El 29 de mayo el Cordobazo tuvo a los estudiantes y a los obreros como protagonistas de una revuelta de dimensiones inusitadas en la historia política argentina. El gobierno se tambaleó, y un año después, luego de muchas réplicas de sublevaciones populares, caía el onganiato. Pero el año 1969 significó mucho más que una mera modificación en el elenco gubernamental. Fue el inicio de una etapa de protestas y radicalización en la que las universidades estarían en el centro de los sueños de cambio revolucionario.

A modo de cierre

A lo largo de los quince años que separan la caída del general Perón del fin del gobierno de Juan Carlos Onganía, la universidad fue un protagonista de la vida política argentina. Distintos sectores pusieron en ella la expectativa de liderar un proceso de transformación, la llave del desarrollo que permitiría al país dejar atrás sus pesadillas sociales y políticas. Este rol como sujeto político fue aceptado y potenciado por la comunidad universitaria, que se puso a la cabeza de ambiciosos proyectos. En ese clima, el movimiento estudiantil nunca perdió protagonismo. Fue también un actor central de la década de 1960, un tiempo en el que se combinaron las expectativas sociales respecto de los jóvenes y sus capacidades intelectuales y académicas para liderar un proceso de desarrollo. En esos años también se reprodujo una constante: la oposición de los estudiantes al avasallamiento de la autonomía universitaria y a sus derechos democráticos en la vida interna de las casas de altos estudios. En el convulsionado mar de la inestabilidad política argentina, las universidades públicas pudieron defender su independencia y su organización interna.

Las continuidades, sin embargo, no deberían hacernos olvidar de los límites y mutaciones operados en estos años. Los ambiciosos proyectos en los que la universidad se embarcó demandaban una serie de inversiones que el estado de la economía argentina no podía solventar. Al mismo tiempo, el proceso de modernización académico se encontró con resistencias en la misma universidad, donde los grupos conservadores se oponían —con las armas que la democracia interna les ofrecía— a cualquier cambio. Por su lado, los estudiantes también habían cambiado en forma dramática su perfil entre 1955 y 1970. Su relación con la Reforma y el liberalismo se había alterado. El estudiantado era a principios de los años setenta mucho más heterogéneo y plural. Se habían sumado muchos grupos católicos, que en las décadas previas habían sido hostiles a los principios de la Reforma o sencillamente apáticos al movimiento estudiantil. El peronismo había logrado hacer pie en muchas agrupaciones universita-

rias, luego de décadas de ser el gran enemigo por vencer. La cultura del liberacionismo cristiano les ofrecía ahora a muchos estudiantes “comprometidos” una justificación para luchar contra la dictadura de la Revolución Argentina a través de los mismos documentos eclesiásticos que, como el Concilio Vaticano II, Medellín o la encíclica *Populorum progressio* parecían condenar las injusticias del mundo, sin tener que recurrir al repertorio del “marxismo ateo”.

El movimiento estudiantil se nacionalizó en esos años. Cualquiera sea la interpretación que le demos a ese término. La de los actores de la época remitía a abandonar los esquemas mentales “europeos” —vinculados a la tradición liberal— y a incorporar el nacionalismo como una renovada clave de interpretación de la Reforma. Pero también la nacionalización era el resultado de un mayor protagonismo de los estudiantes de las ciudades del interior del país luego de 1966, liderando las grandes sublevaciones populares que terminaron minando la autoridad de la Revolución Argentina.

Finalmente, la confianza en el desarrollo —y en el aporte de la ciencia y la tecnología— como medio para la transformación social había decaído. La revolución y la ruptura de la dependencia política eran vistas, a principios de los setenta, como un paso indispensable para abandonar el atraso y la pobreza latinoamericana. La neutralidad de la ciencia con su apoliticidad y el “cientificismo” dejaban su lugar ahora a un mundo académico desbordado por la acción política.

Referencias bibliográficas

Acha, O. (2018). *Reforma universitaria y primer peronismo*. En D. A. Mauro y J. A. Zanca, *La reforma universitaria cuestionada*. Rosario: HyA ediciones.

Almaraz, R.; Corchon, M. y Zemborain, R. (2001). *¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-1955)*. Buenos Aires: Planeta.

Buchbinder, P. (2010). *Historia de las universidades argentinas*. Buenos Aires: Sudamericana.

- Buchbinder, P. y Califa, J. S. (eds.) (2010). *Apuntes sobre la formación del movimiento estudiantil argentino (1943-1973)*. Buenos Aires: Final Abierto.
- Bonavena, P. (2005). El integralismo de Córdoba frente a la Revolución Argentina durante 1966: la radicalización del catolicismo universitario. *IV Jornadas de Sociología de la UNLP. La Argentina de la crisis: desigualdad social, movimientos sociales, política e instituciones*. Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 23 al 25 de noviembre de 2005, La Plata.
- Califa, J. S.
(2014). Los humanistas en la Universidad de Buenos Aires. Orígenes, desarrollo, radicalización política y ocaso de una corriente estudiantil de peso. 1950-1966. *Conflicto Social*, 4(5), pp. 58-87.
- (2014). *Reforma y revolución. La radicalización política del movimiento estudiantil de la UBA 1943-1966*. Buenos Aires: Eudeba.
- Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (1978). *Veinte años de universidades privadas en la República Argentina*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Cosse, I. (2014). *Mafalda: historia social y política*. Buenos Aires: FCE.
- Diburzi, N.
(2007). El movimiento estudiantil universitario santafesino en la segunda mitad de los '60. El '68 en Santa Fe. *Historia Regional*, (25), pp. 101-115.
- (2014). Entre dos huelgas de hambre. Conflictividad en el ámbito universitario católico santafesino. *Conflicto Social*, 4(5), pp. 88-123.
- Dip, N. A. (2017). Antecedentes y orígenes de las primeras experiencias de peronización en la UBA. 1966-1970. *Folia Histórica del Nordeste*, (29), pp. 81-112.
- Di Stefano, R. (2010). Ovejas negras. *Historia de los anticlericales argentinos*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Fiorucci, F. (2011). *Intelectuales y peronismo: 1945-1955*. Buenos Aires: Biblos.
- Franco, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976*. Buenos Aires: FCE.
- Luca, R. de y Prieto, N. A. (2013). La sanción de la Ley Orgánica de las Universidades en la Argentina bajo la dictadura de Onganía y la intervención de los distintos organismos nacionales e internacionales en el diseño de las transformaciones. *Perfiles Educativos*, 35(139), pp. 110-126.
- Manzano, V. (2014). *The Age of Youth in Argentina: Culture, Politics, and Sexuality from Perón to Videla*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Mendonça, M. (2018). ¿Qué hacer con los universitarios? La política universitaria en transición. Entre el autoritarismo y la construcción del diálogo (1966-1971). *Quinto Sol*, 23(1).
- Micheletti, M. G. (2018). *Laica o libre. Las disputas por la creación de las universidades privadas (1955-1959)*. Rosario: Logos.
- Millán, M. (2013). El movimiento estudiantil cordobés. Del Cordobazo a la primavera camporista (mayo de 1969 - mayo de 1973). *X Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Millán, M.; Bonavena, P. y Califa, J. S. (2007). *El movimiento estudiantil argentino: historias con presente*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Neiburg, F. G. (1998). *Los intelectuales y la invención del peronismo: estudios de antropología social y cultural*. Buenos Aires: Alianza.
- Orbe, P. A. (2004). La Liga de Estudiantes Humanistas del Sur y la democracia: análisis del discurso político del humanismo cristiano universitario en Bahía Blanca (1955-1966). *VI Encuentro Corredor de las Ideas del Cono Sur "Sociedad civil, democracia e integración"*. Montevideo.

Pis Diez, N. (2014). Universidad y política en el postperonismo: El caso de la Universidad Nacional de La Plata y su movimiento estudiantil (1955-1966). Un estado de la cuestión. *VIII Jornadas de Sociología de la UNLP*. Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 3 al 5 de diciembre de 2014, Ensenada.

Pronko, M. A. (2000). *El peronismo en la universidad*. Buenos Aires: Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, UBA.

Rodríguez, L. (2018). Las universidades católicas y privadas frente a los principios reformistas. En Mauro, D. A. y Zanca, J. A., *La reforma universitaria cuestionada*. Rosario: HyA ediciones.

Rotunno, C. A. y Díaz de Guijarro, E. (2003). *La construcción de lo posible. La Universidad de Buenos Aires de 1955 a 1966*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Sarlo, B. (2007). *La batalla de las ideas (1943-1973)*. Buenos Aires: Emecé.

Suasnábar, C. (2004). *Universidad e intelectuales. Educación y política en la argentina (1955-1976)*. Buenos Aires: FLACSO-Manantial.

Toer, M. (1988). *El movimiento estudiantil de Perón a Alfonsín*. Buenos Aires: CEAL.

Vega, N. (2015). El movimiento estudiantil santafesino durante el Onganiato. *Contenciosa*, (5).

Zanca, J. A.

(2006). *Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, 1955-1966*. Buenos Aires: Universidad de San Andrés - Fondo de Cultura Económica.

(2013). *Cristianos antifascistas. Conflictos en la cultura católica argentina, 1936-1959*. Buenos Aires: Siglo XXI.

(2014). Profetas de otra tierra. Viajeros religiosos en la Argentina de los años sesenta. En F. C. Flores y P. Seiguer, *Experiencias plu-*

rales de lo sagrado. La diversidad religiosa argentina en perspectiva interdisciplinaria. Buenos Aires: Imago Mundi.

(2018). *Los humanistas universitarios. Historia y memoria (1950-1966)*. Buenos Aires: Eudeba.